INFORME 14/2011 DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD POR LA PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN 2002/546/CE RESPECTO A SU PERÍODO DE APLICACIÓN [COM (2011) 443 FINAL] [2011/0192 (CNS)]

ANTECEDENTES

A. El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, ha establecido un procedimiento de control por los Parlamentos nacionales del cumplimiento del principio de subsidiariedad por las iniciativas legislativas europeas. Dicho Protocolo ha sido desarrollado en España por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 8/1994, de 19 de mayo. En particular, los nuevos artículos 3 j), 5 y 6 de la Ley 8/1994 constituyen el fundamento jurídico de este informe.

B. La Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su período de aplicación, ha sido aprobada por la Comisión Europea y remitida a los Parlamentos nacionales, los cuales disponen de un plazo de ocho semanas para verificar el control de subsidiariedad de la iniciativa, plazo que concluye el 17 de octubre de 2011.

C. La Mesa y los Portavoces de la Comisión Mixta para la Unión Europea, el 6 de septiembre de 2011, adoptaron el acuerdo de proceder a realizar el examen de la iniciativa legislativa europea indicada, designando como ponente al Diputado D. Fernando Ríos Rull, y solicitando al Gobierno el informe previsto en el artículo 3 j) de la Ley 8/1994.

D. La Comisión Mixta para la Unión Europea, en su reunión celebrada el 20 de septiembre de 2011, aprobó este

INFORME

1.- El artículo 5.1 del Tratado de la Unión Europea señala que “*el ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad*”. De acuerdo con el artículo 5.3 del mismo Tratado, “*en virtud del principio de subsidiariedad la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino*

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión”.

2.- La propuesta legislativa analizada se basa en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3.- Las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), aplicables a las regiones ultraperiféricas de la Unión, entre las que se cuentan las Islas Canarias, no autorizan, en principio, ninguna diferencia a nivel impositivo entre los productos locales y los de España u otros Estados miembros. No obstante, el artículo 349 del TFUE (antiguo artículo 299, apartado 2, del Tratado CE), que introduce el llamado principio de modulación -en virtud del cual se han de fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes-, prevé la posibilidad de introducir medidas específicas en favor de dichas regiones ultraperiféricas como consecuencia de las desventajas permanentes a las que se ven expuestas, que repercuten en su situación económica y social.

4.- La Decisión 2002/546/CE del Consejo, de 20 de junio de 2002, adoptada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE, autoriza a España a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2011, exenciones y reducciones del tributo denominado Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), vigente en las Islas Canarias para determinados productos fabricados en ellas. En el anexo de dicha Decisión se incluye la lista de los productos a los que pueden aplicarse exenciones o reducciones del impuesto.

5.- La Decisión 2002/546/CE expone los motivos que han conducido a la adopción de medidas específicas, aludiendo concretamente a la lejanía, la dependencia con respecto a las materias primas y la energía, la obligación de constituir mayores existencias, la pequeña dimensión del mercado local y una actividad exportadora poco desarrollada. Tomados en su conjunto, estos factores desfavorables provocan un aumento de los costes de producción y, por ende, del precio de coste de los productos de fabricación local, los cuales, de no establecerse medidas específicas, serían menos competitivos que los procedentes del exterior, incluso teniendo en cuenta los costes de transporte de estos últimos a las Islas Canarias. Todo ello, dificultaría en mayor medida el mantenimiento de una producción local. Por tanto, la finalidad perseguida con las medidas específicas incluidas en la Decisión 2002/546/CE es la de consolidar la industria local mediante la mejora de su competitividad.

6.- La crisis económica mundial de 2009, con su impacto en la reducción de los viajes, tuvo graves consecuencias en la economía de las Islas Canarias, que dependen mucho de los ingresos del turismo.

La disminución de la población activa en el sector del turismo ha dado lugar a un aumento importante del paro en las Islas Canarias. La tasa de paro, que, en el período 2001-2007, oscilaba entre el 10,4 % y el 12 %, ascendió a un 17,3 % en 2008 y un 26,2 % en 2009. Esta evolución confirma el peligro de una economía muy dependiente del turismo y la necesidad de promover una diversificación de las actividades económicas.

7.- El 16 de noviembre de 2010, España presentó una solicitud a la Comisión Europea para prorrogar el período de aplicación de la Decisión 2002/546/CE en dos años, de manera que la fecha de expiración coincidiera con la de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.

España también ha presentado una solicitud para prorrogar en dos años el período de aplicación de la Decisión de ayuda estatal NN 22/2008, según la cual la ayuda concedida por las autoridades españolas, con respecto al AIEM, es compatible con el mercado común. La Comisión ha redactado la Decisión de ayuda estatal NN 544/2010 por la que se prorroga el período fijado en la Decisión de ayuda estatal NN 22/2008, que está lista para su adopción, asegurándose de su concordancia con la presente propuesta.

8.- En cuanto a la solicitud de prórroga del período de aplicación de la Decisión 2002/546/CE, la Comisión Europea la ha evaluado a la luz de la magnitud de las desventajas que afectan a las Islas Canarias y ha llegado a la conclusión de que está justificado, sobre la base de los elementos disponibles, conceder la solicitud.

En primer lugar, cabe señalar que el informe de la Comisión Europea al Consejo sobre la aplicación del régimen especial relativo al Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) vigente en las Islas Canarias, adoptado el 28 de agosto de 2008, confirmó que el arbitrio estaba funcionando satisfactoriamente y no era necesario introducir modificaciones en la Decisión 2002/546/CE. Asimismo, la persistencia de las desventajas está confirmada por el informe que acompaña a la presente solicitud de prórroga del período de aplicación de la Decisión 2002/546/CE.

En segundo lugar, en la solicitud se pide una prórroga de dos años solamente a fin de hacerlo coincidir con las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional, que son aplicables durante el período 2007-2013.

9.- Por su parte, compete exclusivamente al Consejo adoptar, de conformidad con el artículo 349 del TFUE, medidas específicas en favor de las regiones ultraperiféricas a fin de adaptar la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes, a dichas regiones, a causa de sus desventajas permanentes, que repercuten en su situación económica y social.

CONCLUSIÓN

Por los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/546/CE respecto a su período de aplicación, es conforme al principio de subsidiariedad establecido en el vigente Tratado de la Unión Europea.